

Las administraciones buscan soluciones a la inundabilidad en el Guadalhorce



JESÚS HINOJOSA

jhinojosa@diariosur.es

Gobierno, Junta y Ayuntamiento reúnen por vez primera a sus técnicos en Madrid para analizar medidas que reduzcan los riesgos

MÁLAGA. Los despachos del Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, acogieron ayer una reunión decisiva para dar una solución a los problemas de inundabilidad que presentan los suelos del entorno de la desembocadura del Guadalhorce, sobre todo después de que se hayan aprobado unos mapas de riesgo que suponen un freno para las inversiones que se quieran acometer en esta zona de la capital. Por vez primera, Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento citaron en una misma asamblea a sus técnicos para poner en común posibles soluciones para reducir los riesgos de avenidas y, de este modo, garantizar la seguridad de los bienes y las personas, y también desbloquear diversos proyectos urbanísticos.

En la reunión, se abordaron los diferentes ensayos realizados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre la capacidad del encauzamiento del Guadalhorce y se llegó a la conclusión de que es necesario acometer una serie de obras para garantizar una capacidad de 4.000 metros cúbicos por segundo que, actualmente, está mermeada por varios obstáculos. Uno de ellos es que el actual puente



Los empresarios están preocupados por el freno a inversiones que implican los mapas de riesgo. :: SUR

Barajan mantener el actual puente de la Azucarera y remodelarlo para reducir los costes de las obras

de la antigua N-340 o puente de la Azucarera no está dimensionado o adaptado a la obra del encauzamiento que se realizó años atrás. Por ello, en los planes hidrológicos elaborados por la Junta y aprobados por el Gobierno, se propone la sustitución de este puente por uno nuevo que permita un mayor paso del agua, una actuación que se cifra en 60 millones de euros y que se atribuye a la Ad-

ministración central, si bien según una reciente respuesta parlamentaria al PSOE, ésta quiere que la acometa el Ayuntamiento.

Según explicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, en la reunión de ayer no se entró en determinar qué administración paga cada obra, sino que revisó un carácter técnico. «Se han visto posibles soluciones y se ha quedado en seguir estudiándolas para tenerlas definidas cuanto antes. Una vez que estén claras, ya veremos quién las realiza», apuntó el edil, que valoró positivamente el espíritu de «cordialidad» de la convocatoria para avanzar en este asunto, que tiene muy preocupados a los empresarios

de los polígonos del entorno del Guadalhorce.

Los técnicos dejaron clara la necesidad de suprimir varios obstáculos que restan capacidad al encauzamiento, como los restos del antiguo puente del tren de cercanías, que se soterró bajo el río; los de la rotonda de una carretera en desuso; e incluso el observatorio de aves que existe en la desembocadura. Además, se puso sobre la mesa la posibilidad de no tener que sustituir el puente de la Azucarera y reformar el existente para mejorar el tránsito del agua. Raúl Jiménez reconoció que esa opción abarataría los costes de las obras para reducir la 'mancha' de la inundabilidad en el entorno del Guadalhorce.

Urbanismo estudia las fórmulas para obtener el suelo de la zona franca

:: J. HINOJOSA

MÁLAGA. El equipo de la Gerencia Municipal de Urbanismo mantuvo ayer una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, en la que se abordaron diversas cuestiones relativas al planeamiento urbanístico de la ciudad. Según pudo conocer este periódico, una de ellas fue la obtención del suelo para la zona franca que el regidor proyecta al sur del Parque Tecnológico, en unos terrenos situados entre la barriada de Santa Rosalía y la autovía del Guadalhorce y su ramal de acceso al PTA.

Urbanismo baraja varias fórmulas para hacerse con los suelos de esa posible zona franca, que suman 585.618

metros cuadrados. No obstante, según fuentes consultadas, la intención de los responsables municipales es encajar el desarrollo de ese proyecto dentro de las condiciones para todo este vacío urbano, que suma dos millones de metros cuadrados, y en el que también están previstos usos empresariales, comerciales y residenciales. Son unos 800 los propietarios de parcelas con los que el Ayuntamiento tendría que negociar toda esta operación urbanística, cuyo desarrollo depende de que al menos una gran compañía privada esté dispuesta a implantarse en la zona franca. Es la condición que ha puesto el Gobierno central para avalarla como tal.